

[Capítulo VII

Costos políticos y geopolíticos de la inserción/no inserción de Venezuela en el ALCA

Rita Giacalone]

La decisión del gobierno de Venezuela de participar o no en la firma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) si este Tratado llegara a firmarse en el año 2005, incluye aristas no económicas que aquí se analizan desde dos perspectivas: la de la política doméstica venezolana y la del posicionamiento geopolítico del gobierno venezolano en el hemisferio occidental.

El primer análisis requiere revisar las posiciones sustentadas por el gobierno, los partidos políticos de la oposición y las principales asociaciones empresariales de Venezuela frente al ALCA, con el fin de aquilatar si la inserción en el ALCA permitiría al gobierno atraer partidarios o si, por el contrario, le restaría apoyo entre algunos de sus seguidores. En este nivel se propone como hipótesis tentativa que la no inserción en el ALCA podría considerarse poco costosa para el gobierno venezolano en términos de apoyo político doméstico, ya que la decisión de ingresar no le va a ganar apoyo entre sus opositores, sin embargo, paradójicamente, la no inserción tendría un impacto económico en el ámbito doméstico que podría restarle apoyo entre quienes lo apoyan.

En tanto la geopolítica considera la incidencia de los factores geográficos de las naciones en su política exterior (Guadagni, 2001, p. 101), una forma de medir la capacidad geopolítica de un gobierno es observando si la adopción de una determinada posición es tenida en cuenta por sus vecinos más cercanos, que forman los llamados «bloques naturales», ya sea adoptándola o preocupándose por el costo que representaría para ellos no prestarle atención. Por lo tanto, para realizar este análisis es necesario observar las posiciones frente al ALCA expresadas tanto por el principal actor regional, MERCOSUR-Brasil, como por aquellos grupos de países en los cuales Venezuela ha tenido tradicionalmente alguna relevancia, como la Comunidad Andina de Naciones-CAN, a fin de evaluar en qué medida han incorporado elementos de la posición sostenida por el gobierno venezolano. Así mismo interesa determinar qué impacto tendría sobre ellos el hecho de que Venezuela decidiera eventualmente su no inserción en el ALCA. Aquí se propone como hipótesis que en este nivel regional el costo¹ de la no inserción de Venezuela sería más alto que en el doméstico porque podría poner en evidencia la erosión del posicio-

¹ Se entiende por costos los efectos negativos vinculados a una decisión de política pública, los cuales incluyen tanto las consecuencias que se deberían minimizar como el valor de las alternativas perdidas al tomar una decisión (Quade, 1989, pp. 163-164).

namiento geopolítico del país durante los últimos años, la cual se manifestaría en el hecho de que su decisión no tendría «efecto de arrastre» para las decisiones de otros gobiernos. La expectativa del gobierno venezolano residiría entonces en mantenerse en el juego asumiendo, por ejemplo, la tercera opción representada por la alternativa de establecer un ALCA mínimo sin avanzar más allá, según lo propuesto por Brasil en Miami en noviembre de 2003.

Plano doméstico de la inserción/no inserción de Venezuela

En el plano político doméstico el debate sobre el ALCA sufre de limitaciones importantes desde 1998 tanto porque existen otros problemas de la situación política y económica interna considerados más importantes como porque el gobierno ha intentado monopolizarlo y/o desalentarlo. Sin embargo, se advierte recientemente un mayor interés por el ALCA entre los actores no gubernamentales (básicamente partidos políticos de la oposición, asociaciones empresariales y sindicales), lo cual ha obligado al gobierno a definir mejor las razones de su oposición desde finales del año 2001 —cuando mencionó por primera vez una propuesta alternativa— y a crear organismos destinados a promover sus posiciones en la negociación, como una Comisión de la Asamblea Nacional, distintos foros del Ministerio de Producción y Comercio (MPC) y la Comisión Asesora Presidencial para las Negociaciones del ALCA. En el año 2004, sin embargo, dos factores se combinaron para reducir aún más el interés por el debate sobre el ALCA en Venezuela: uno fue externo, pues las elecciones presidenciales en Estados Unidos abrieron un compás de espera en la negociación, y el otro interno, en la medida en que la atención se concentró en torno de la realización del referéndum revocatorio del mandato presidencial en agosto y de las elecciones de gobernadores y alcaldes en octubre. A principios del año 2005, con una probable reactivación del proceso negociador del ALCA anunciada para febrero, el tema vuelve a adquirir vigencia.

El gobierno venezolano entiende la propuesta del ALCA como un ejemplo de «integración neoliberal que prioriza la liberalización del comercio y las inversiones», además de establecer «un marco legal y entorno institucional supranacional que compromete la soberanía nacional y la democracia». Sus principales objeciones derivan de su propia preferencia por una política económica que «impone el fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos» y de argumentos relativos a las limitaciones que impondría el ALCA a la potestad y soberanía del Estado para «defender a nuestros aparatos productivos» (Chávez, 2002). Como ejemplo de esta posición, un discurso del viceministro de Industria y jefe del equipo negociador del ALCA por Venezuela (Álvarez, 2003a) plantea que éste no es un acuerdo comercial sino «el establecimiento de un orden legal e institucional supranacional que finalmente terminaría por prevalecer sobre el que actualmente rige en nuestro país». El gobierno sostiene además que la participación de Venezuela en el ALCA debe ser sometida a consulta popular y ha apoyado la creación de Fondos Compensatorios para la Convergencia Estructural destinados a disminuir las asimetrías y desigualdades entre los países participantes. Desde la Cumbre de Québec insiste también en rechazar el año 2005 como fecha para que el acuerdo hemisférico entre en vigencia.

En la Reunión Ministerial de Miami (noviembre de 2003) la delegación venezolana sostuvo la posibilidad de modificar la lista de exclusión de productos agrícolas sensibles una vez entrado en vigencia el Tratado y propuso al Grupo Consultivo de Economías Más Pequeñas establecer medidas de asistencia técnica y ampliar los plazos para cumplir los compromisos y disciplinas del ALCA (ALCA, CNC: 4 de febrero de 2004). En esa reunión Venezuela se auto-clasificó «como una economía pequeña, subdesarrollada, menos adelantada, en desarrollo...», luego de no haber conseguido que se definiera de mane-

ra clara cuáles serían las economías objeto de tratamiento especial y diferenciado (Comisión Presidencial para el ALCA, 2003, p. 59) ni que el Grupo Consultivo cambiara su nombre para incorporar no sólo a las economías más pequeñas sino también todos los desniveles en el desarrollo de las naciones que participan en la negociación del ALCA.

El gobierno venezolano ha presentado además un proyecto propio, el ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe), en el cual se incluyen: el mantenimiento de medidas arancelarias y no arancelarias como instrumentos para promover y proteger la agricultura y la industria por parte de los países en desarrollo; el condicionamiento de las inversiones extranjeras a la adquisición de materias primas, bienes y servicios nacionales y la imposibilidad de ejercer demandas contra leyes y regulaciones de interés público; el otorgamiento de prioridad a las empresas nacionales en las compras gubernamentales; la exclusión de las empresas públicas de las leyes antimonopolio; la prohibición para los inversionistas extranjeros de demandar a los Estados por el manejo de monopolios estatales; el establecimiento de derechos compensatorios frente al *anti-dumping* y a los subsidios, y la participación de las organizaciones sociales en las negociaciones (Álvarez, 2003b). Esta alternativa, sin embargo, no ha logrado apoyo en los encuentros regionales (Sucre, 2003), ni siquiera dentro de la CAN, lo cual reconocen sus mismos partidarios (Madrid, 2002; ASC, 2003)².

La posición del gobierno de Venezuela se vincula con el concepto de integración regional incluido en la Constitución venezolana de 1999, en la cual la integración económica se subordina a una unión latinoamericana primordialmente política y estratégica. En este sentido la integración se define como una unión política, económica, militar, científica y cultural, sustentada en el bolivarianismo como «sistema ideológico» (Chávez, 2000), con mecanismos de seguridad regional y colaboración entre instituciones militares que en América del Sur serían equivalentes a una «alianza de seguridad como la Organización del Atlántico Norte-OTAN» (González Urrutia, 2000). Se vincula, por lo tanto, con el concepto de una Unión Sudamericana —alianza política y militar que incluiría algunos componentes económicos³— más que con el desarrollo de un área de libre comercio sudamericana entre la CAN y el MERCOSUR para fortalecerse mutuamente antes de negociar el ALCA. Desde esta visión, el ALCA es atacado porque representa un proyecto de integración distinto al que busca el gobierno venezolano (Cardozo y Romero, 2001, pp. 9-10), partidario de un concepto de integración con componentes ideológicos y militares. Como este concepto no cuenta con un amplio apoyo doméstico, el gobierno venezolano ha recurrido a dos estrategias: primero, desalentar el debate nacional sobre el ALCA entre 1998 y 2000⁴ y, desde entonces, dejar de lado cualquier intento de aproximación al tema sobre la base de estudios técnicos, considerados innecesarios y hasta irrelevantes, para promover en cambio una posición alineada con las de las organizaciones no gubernamentales anti-ALCA, de las cuales toma tanto contenido como discurso⁵.

En lo relativo a los partidos de la oposición (Acción Democrática, Proyecto Venezuela, COPEI y Primero Justicia, entre otros), no existe debate interno o externo al respecto ni se han fijado posiciones públicas frente al ALCA. Las declaraciones a la prensa de dirigentes opositores critican mayormente

² Véase un análisis comparativo del ALCA y del ALBA en «Del ALCA al ALBA. Claves para la Alternativa Bolivariana para América Latina»; cf. Álvarez, 2003b.

³ Estos componentes buscarían especialmente articular las empresas estatales venezolanas, localizadas en el oriente del país, con el nordeste de Brasil para promover un nuevo polo de desarrollo.

⁴ En esos años hubo poca actividad gubernamental en torno del ALCA, según Álvarez, Briceño y Bustamante (2002-2003, p. 12), debido al interés del gobierno en que no se debatiera el tema (Romero, 2003).

⁵ Véase como ejemplo Izarra, 2003.

la posición gubernamental venezolana frente al ALCA refiriéndose a la falta de coherencia y de conocimiento técnico que manifiestan los negociadores oficiales, a lo elemental de las posiciones sustentadas, a la falta de coordinación del gobierno de Venezuela con los gobiernos de los otros países andinos, al aislamiento internacional que auspicia esa actitud y al problema planteado por la rotación o sustitución de los funcionarios técnicos que acompañan al equipo negociador. Para los partidos de oposición la principal debilidad de la posición gubernamental se resume en que como el gobierno venezolano «no es capaz de invocar argumentos contundentes para atacar al ALCA en su espina dorsal que es la economía» termina apoyando cualquier argumento de oposición que otros gobiernos y ONG presentan (Raffalli, 2001), aunque sea poco relevante para el caso venezolano.

Durante el año 2003 se crearon equipos de discusión interna en los principales partidos políticos de la oposición y, como productos de esas discusiones, se generaron documentos como el denominado «Consenso País» de la Coordinadora Democrática (agosto 2003)⁶, que contiene un capítulo sobre política exterior con un punto específico sobre integración. Aunque el documento no fija posición explícita sobre el ALCA, se insiste en que se debe negociar para asegurar que los intereses de Venezuela resulten protegidos en cualquier acuerdo comercial o de integración en que se participe, que ellos deben permitir un mejoramiento efectivo de la calidad de vida y que la posición venezolana debe ser coordinada con la de los otros países andinos. El documento enfatiza la falta de apoyo a la posición del gobierno venezolano en el ámbito andino y su incapacidad para defender los intereses nacionales de Venezuela. En cuanto al primer aspecto, las declaraciones del gobierno venezolano a fines del año 2003 en Brasil contra la CAN, a la cual consideró anacrónica y neoliberal (*El Universal*, 27/04/2003, p. 1-21), fueron evaluadas como resultado de que el presidente venezolano «ha ido predicando contra el ALCA, pero no ha podido persuadir a ningún otro país que lo acompañe en esta cruzada porque los caribeños, como los centroamericanos, como los países del MERCOSUR, como los otros de la CAN, tienen interés en negociar con Estados Unidos» (*El Nacional*, 2/07/2003; sobre el interés de los gobiernos andinos, ver *Notas de Prensa* 13/02 y 17/11/2003 en: www.comunidadandina.org). En la misma línea otro articulista destacaba que «el gobierno venezolano no ha tenido éxito para vender sus propuestas integracionistas. Tanto las intenciones de ser parte de MERCOSUR a costa de la CAN como las ideas alternativas al ALCA han pasado desapercibidas en los encuentros regionales» (Sucre, 2003).

Algunos partidos políticos, como COPEI, fijaron posición sobre el ALCA a finales del año 2002 en una propuesta de política exterior para Venezuela realizada a solicitud del Instituto de Formación Demócrata Cristiano-IFEDEC (Garavini, 2003) donde se otorgaba prioridad en la política de integración al desarrollo de una posición comprometida con el resto de la Comunidad Andina y con las negociaciones entre la CAN y el MERCOSUR, para desde allí «atender a las complejas negociaciones del libre comercio hemisférico y de las relaciones económicas con la Unión Europea». Sin embargo, el ALCA era visto como un proyecto positivo por considerar que la globalización es una realidad y que para enfrentarla en forma adecuada Venezuela debería ampliar su capacidad negociadora con personal profesional, no con «improvisados».

El sector empresarial venezolano⁷ ha expresado su opinión sobre el ALCA en la prensa nacional al cuestionar que existiera alguna diferencia para Venezuela entre ser miembro del MERCOSUR —lo

⁶ Este documento fue producto de un proceso que contó con la participación de 63 organizaciones y expertos, entre ellos 10 partidos políticos de derecha, de centro e izquierda; cf. CD, 2003.

⁷ No se incluye la posición de ONG venezolanas por cuanto pocas se han pronunciado sobre el tema; entre las excepciones está Liderazgo y Visión que se manifestó a favor; cf. *El Universal*, 14/12/2003, p. 1-6.

que el gobierno promueve como alternativa al tratado hemisférico— o del ALCA, dado que esta estrategia no se había consultado a ningún sector productivo del país. La preferencia por un acuerdo con el MERCOSUR antes que con el ALCA era incluso considerada parte de «una estrategia política nacional subyacente ya que desde 1996 los sectores productivos (agricultura y ganadería) que han cuestionado las políticas gubernamentales, han sido los más reacios a una integración con MERCOSUR» (cf. «Sobreviviendo a MERCOSUR», *El Universal*, Caracas, 18/05/2001). Otro artículo señalaba que «La entrada en vigencia del ALCA en el año 2005 no representa para la economía agrícola y agroindustrial venezolana un peligro mayor al de comenzar a bajar los aranceles a partir de un nivel que en la mayoría de los casos se ubica en 15%, como lo establece el Arancel Externo Común Andino. [...] Lo que el sector productivo debe exigir al gobierno nacional es una estrategia de negociación compartida y una política integral que le ayude a enfrentar exitosamente la apertura comercial en el marco del ALCA» (Badillo Rojas, 2002).

Distintas asociaciones empresariales han dejado en claro también que prefieren la inserción de Venezuela en el ALCA, antes que la no inserción. En esto coinciden declaraciones de representantes de FEDEAGRO («La perspectiva del proceso integrador es que va a continuar y en lugar de cerrarnos con dogmas o tras paradigmas tenemos que tener una actitud activa, luchadora y forjadora de nuestro destino para hacer de esa integración algo atractivo como lo han hecho otros países [...]», Calabria, 2002); CONINDUSTRIA («En ningún caso será conveniente para Venezuela excluirse de estas negociaciones y provocar el aislamiento comercial de nuestro país», Hernández, 2002); CONSECOMERCIO («entrar tarde al ALCA o no entrar, como sugiere el gobierno, tiene un precio alto y debe estudiarse con cuidado», Pierantoni, 2002) y FEDECAMARAS («Hay que sumarse; hay que estar dentro [del ALCA]; no podemos quedarnos fuera»: Muñoz, 2003).

Venamcham (Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria) ha sido la asociación que ha asumido la posición más definida de defensa del ALCA por considerar que el acercamiento del gobierno venezolano a Brasil sólo sirve al gobierno brasileño para hacer oposición al ALCA pero perjudica a Venezuela porque, si los intereses brasileños cambian, ese gobierno perdería interés en Venezuela y ésta se encontraría simultáneamente con problemas en sus relaciones comerciales con sus dos socios principales, Estados Unidos y Colombia (Herrera Vaillant, 1997, p. 2). La asociación ha declarado que, aunque la globalización sea injusta, «peor sería aislar a Venezuela de mercados en proceso de integración y condenar al país a transformarse en un enclave económico basado sólo en el petróleo» (*El Universal*, Caracas, 12/01/2004). Además de las principales asociaciones empresariales, también se han manifestado públicamente a favor del ALCA empresarios que, en noviembre de 2003, declararon que lucharían unidos para impulsar el acuerdo pese a la oposición del gobierno (cf. «Empresarios venezolanos critican a Chávez por oponerse al ALCA», *El Nacional*, Caracas, 17/11/2003). La argumentación central de la posición empresarial podría resumirse en estas palabras: «Un ALCA flexible y hábilmente negociado podría generar más beneficios que costos, especialmente para Venezuela que no se beneficia de otros acuerdos de preferencia comercial como nuestros socios andinos o del G3⁸, que han logrado acuerdos que les otorgan ventajas para entrar a mercados como los de Estados Unidos y Canadá» (Neri de Ross, 2003).

Una constante en las declaraciones empresariales ha sido el llamado a que el gobierno escuche las demandas y posiciones del sector privado sobre las negociaciones, considerando que la salida de personal técnico de los ministerios, reemplazado por personal político sin experiencia, afecta negativa-

⁸ Se refiere al tratado de libre comercio del Grupo de Los Tres, firmado por Colombia, México y Venezuela en 1994.

mente la capacidad negociadora del país. CONINDUSTRIA ha planteado que Venezuela necesita «conformar un fuerte equipo negociador, integrado por representantes del sector público y privado» con un plan común y con propuestas para cada uno de los grupos de negociación» (*El Mundo*, Caracas, 14 de mayo de 2001). En septiembre de 2002 ese organismo insistió en que el equipo negociador oficial debía desarrollar un proceso de consultas continuo y exhaustivo con los diferentes sectores productivos (Hernández, 2002). Por su parte, CONSECOMERCIO destacó la falta de respaldo del sector oficial para que el sector privado pueda acompañar al equipo negociador en las reuniones internacionales, como hacen México y Brasil, y para realizar estudios sectoriales de competitividad que otros países adelantan. En agosto de 2001 Venamcham recomendó a la Asamblea Nacional establecer una mesa de discusión para enfrentar la negociación en el ALCA y crear equipos interministeriales con participación del sector privado para analizar las opciones del país (Hernández, K. 2001). En un informe la misma asociación lamentaba que el Ministerio de Producción y Comercio (MPC) no hubiera cumplido el programa de entrevistas establecido con el sector empresarial (Camel, 2001).

En general, no se aprecia entre los empresarios una posición unitaria ni coherente sobre el ALCA pero sí preocupación por lo que perciben como falta de preparación negociadora y técnica del gobierno venezolano frente a un proceso que se discute desde 1994. Así mismo se comparten posiciones tales como que es mejor participar en el ALCA que aislarse, que se debe negociar en forma concertada con la CAN y que se debe abrir un diálogo con los empresarios para asegurar que la posición oficial en la negociación incluya la defensa de sus intereses. Como señalara Carlos Lima, director de la Cámara Petrolera de Venezuela (cf. *Diario Economía Hoy*, Caracas, 29 de diciembre de 1997), la posición empresarial venezolana, como la del resto de la región, está afectada por un dilema básico: «[...] la entrada con libertad de bienes y servicios procedentes de economías con un mayor nivel de desarrollo provoca ciertas reacciones negativas en los proveedores de dichos bienes y servicios a nivel local, ya que ven fuertemente amenazada su propia existencia. Sin embargo, no existe mayor injusticia para una sociedad que obligarla a cancelar un sobre costo por bienes y servicios que podrían ser obtenidos en mejores condiciones. Es un círculo vicioso que no tiene principio ni fin y que debe ser roto para dar paso al progreso de las naciones»⁹.

Por su parte la dirigencia sindical ha estado ausente del debate en la prensa y en los eventos oficiales pero los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de Venezuela-CTV respaldan las posiciones asumidas por la Organización Interamericana del Trabajo-ORIT y sus representantes han participado en el exterior en actividades realizadas por la organización internacional¹⁰. Para ellos el ALCA debe incluir garantías para los derechos laborales (sindicalización, negociación colectiva, no discriminación, seguridad social y prohibición del trabajo infantil); protección y reglamentación de las migraciones laborales; regulación del flujo de capitales especulativos; medidas de alivio de la deuda externa; reglamentación de adquisiciones gubernamentales que permita preferencias nacionales o regionales y no extender la apertura a servicios estatales de interés social y carácter estratégico, entre otras medidas (CIOSL/ORIT, 2001). Mientras tanto los grupos sindicales partidarios del gobierno reunidos en el Frente de Trabajadores Bolivarianos-FTB apoyan que el ALCA sea sometido a referendo debido a la necesidad de fortalecer los acuerdos de integración existentes y de defender los derechos laborales (*El Nacional*, 24 de julio de 2001, citado en Álvarez, Briceño y Bustamante, 2002-2003, p. 46).

⁹ Un argumento similar utiliza Elorza (2003), cuando señala que mantener dentro del ALCA la protección arancelaria de los países andinos para enfrentar los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Canadá significa un mayor costo de producción para las cadenas agroindustriales de los primeros y los condena a mantener su falta de competitividad.

¹⁰ La CTV ha votado en esos eventos internacionales a favor de las posiciones de la ORIT.

La falta de un amplio debate nacional sobre el ALCA encuentra eco en el hecho de que este tema tampoco parece ser objeto de discusión dentro del partido de gobierno (Movimiento V^a República-MVR) ni de algunos sectores empresariales que lo respaldan. Así, por ejemplo, en el Taller Empresarial realizado en abril de 2003 en Caracas dentro del Congreso Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana (ver: www.aporrea.org.ve) ninguno de los representantes de esas asociaciones mencionó el ALCA en sus exposiciones y tampoco hubo preguntas al respecto. Al parecer, actuaban de acuerdo con las palabras del presidente venezolano: «Yo no quiero discutir sobre el ALCA, para mí es inviable, es una perdedera (sic) de tiempo, en la versión en la que me lo presenten, ya sea ALCA, ALCA light, Alquita...» (cf.: «Chávez recomienda...», *El Universal*, Caracas, 25 de noviembre de 2003). En consecuencia, las actividades oficiales en torno del ALCA se han centrado en difundir la posición del gobierno a través de dos instancias: primero, una Comisión de la Asamblea Nacional en la cual participan diputados del MVR y de la oposición y, desde finales del año 2002, una Comisión Asesora Presidencial para las Negociaciones del ALCA, con participación de representantes de distintos ministerios, diputados y académicos de izquierda. Esta última comisión en la práctica se ha convertido en el equipo negociador de Venezuela, desplazando de las negociaciones tanto al Ministerio de Producción y Comercio-MPC como al de Relaciones Exteriores-MRE y poniendo fin a la poca participación empresarial que quedaba¹¹.

En cuanto a la comisión parlamentaria, la idea inicial fue promovida por la oposición dentro de la Asamblea Nacional pero los partidarios del gobierno, con mayoría dentro de la misma, asumieron su control y la utilizaron para difundir la posición gubernamental. Entre sus primeras actividades estuvo la convocatoria hecha en agosto de 2001 a representantes de las asociaciones empresariales, a quienes se les presentó la posición oficial acerca del ALCA y se invitó a enviar sugerencias y comentarios. Sin embargo, no hubo actividades de seguimiento, ni siquiera respuesta a los comentarios y demandas empresariales que se le hicieron llegar¹² de manera que no se abrió con el sector privado el diálogo que entonces se esperaba. En cambio, la comisión inició una serie de foros públicos en Caracas y en el interior del país, auspiciados también por el MPC, con la participación de funcionarios técnicos de la negociación, aunque en general la discusión fue más política que técnica¹³ y se desalentó la expresión de opiniones que no concordaran con la oficial. A esos foros el gobierno invitó también a académicos de orientación anti-ALCA de Brasil y México, principalmente a miembros de la Red Mexicana contra el Libre Comercio (RMALC).

En resumen, en el debate sobre el ALCA dentro de Venezuela se aprecia que:

- mientras el gobierno defiende una concepción política, estratégica e ideológica de la integración, empresarios y partidos de oposición analizan y discuten sus aspectos económicos;
- el gobierno apoya conceptos amplios —necesidad de disminuir la pobreza y de promover los derechos de las mujeres y de las minorías dentro del ALCA— sin especificar cómo alcanzarlos pero no aborda aspectos concretos sobre inversiones, servicios, propiedad intelectual, política de competencia, etc.;
- gobierno y partidos de oposición coinciden en que Venezuela necesita tratamiento especial y diferenciado dentro del ALCA pero difieren en las razones pues los empresarios y partidos de oposición lo atri-

¹¹ Esta Comisión ha publicado en español e inglés una recopilación de los discursos y documentos presentados por Venezuela entre abril y noviembre de 2003 dentro de la negociación del ALCA (Comisión Presidencial para el ALCA, 2003).

¹² Véase como ejemplo la respuesta enviada por la Cámara de Comercio de Caracas el 4 de septiembre de 2001, Boletín N° 16 (10/09/2001) en www.ccc.com.ve y también la carta abierta de Venamcham al Presidente en *El Universal*, 26/04/2002.

¹³ Testimonio personal de la autora luego de haber participado en un foro nacional en Caracas y dos regionales en San Cristóbal y Mérida.

buyen a las desacertadas políticas económicas del gobierno, incluyendo su falta de diálogo, y el gobierno hace énfasis en factores externos como la globalización y el poder de las empresas transnacionales;

- la información que circula es contradictoria ya sea porque el gobierno prefiere que no haya debate o porque resulta difícil contar con información confiable sobre el ALCA en un contexto polarizado: por las posiciones anti- y pro-ALCA dentro de la región y por las posiciones pro- y anti-gobierno dentro de Venezuela, y
- aunque el gobierno presenta su posición como una defensa de los intereses de la CAN, la mayoría de los partidos políticos de oposición defiende la necesidad de que Venezuela negocie el ALCA a partir de una posición concertada con la CAN, cosa que parece que el gobierno no estaría haciendo¹⁴.

Dentro de este contexto el ALBA parece una estrategia orientada a complicar la negociación y a distraer la atención en las discusiones domésticas y regionales más que una propuesta efectiva. Esto explicaría los términos generales que aparecen en los documentos gubernamentales al respecto, e incluso cómo cambian de un documento a otro (por ejemplo, comparar Álvarez, 2003b con Declaración ..., 2003) y la incapacidad del gobierno para generar respaldo de otros gobiernos latinoamericanos para esta propuesta. En el ámbito doméstico no busca ganar la adhesión de sectores distintos a los que ya lo apoyan, sino justificar y difundir su posición entre sus partidarios en términos sencillos e impactantes, ya que la oposición política, los empresarios y la comunidad académica, grupos que manejan un discurso más específico y técnico, insisten en la necesidad de compatibilizar las demandas de trabajadores y empresarios con los intereses de Venezuela dentro de una posición nacional concertada. El ALBA no da cuenta de estas demandas y enfatiza, unas veces, las posiciones de las ONG anti-ALCA (derechos ambientales, de género, de grupos indígenas y participación social) y otras veces demandas específicas de otros gobiernos latinoamericanos (eliminación de subsidios agrícolas y tratamiento especial y diferenciado) que no se perciben como relevantes porque Venezuela no es un importante exportador agrícola sino un país importador neto de alimentos y su economía no calificaría entre las destinadas a recibir tratamiento especial y diferenciado.

Asumiendo entonces que existe la posibilidad de que Venezuela no se inserte en el ALCA, esto significaría un impacto económico y social considerable en la sociedad venezolana si como parte del ALCA o de acuerdos bilaterales de comercio los otros países negocian medidas más profundas. Veamos someramente, como ejemplos, tres aspectos de este costo:

1. El ALCA significará la desaparición de las preferencias comerciales que amparan las exportaciones no tradicionales entre socios de la ALADI y 'nivelará' el acceso a los mercados hemisféricos para estos países. Si bien esto implica oportunidades para la exportación de nuevos rubros para los países que se encontraban en desventaja ante competidores privilegiados por esas preferencias (ALADI, 2002, p. 98), para una Venezuela no insertada en el ALCA significaría la desaparición de las preferencias arancelarias de que goza actualmente en los mercados regionales sin nada que las sustituya. Más aún, los países que importaban desde Venezuela, al ingresar al acuerdo hemisférico van a obtener acceso a otros proveedores más competitivos que podrían ofrecerles productos con mejores condiciones técnicas, de financiamiento, etc.

2. Como el petróleo y sus derivados aportan alrededor de 80% de la exportación total de Venezuela en el hemisferio (ALADI, 2002, p. 66) y el tamaño y rendimiento de los yacimientos petroleros le otorga al país fuertes ventajas comparativas, estas exportaciones no se alterarían al quedar fuera

¹⁴ Rodríguez Pons, *El Nacional* 14/09/2002, citado en Álvarez, Briceño y Bustamante (2002-2003, p. 46) y *El Universal*, Caracas, 6/02/2003, para declaraciones de los ministros de comercio exterior de la CAN llamando a Venezuela a unirse a ellos para avanzar en las negociaciones del ALCA.

del ALCA pero atraer inversiones y tecnología hacia otros sectores podría tomarse más difícil y costoso, generando problemas a mediano y largo plazo. Esto podría afectar incluso importantes exportaciones venezolanas a los países del ALCA, como las de la siderurgia y de la industria del hierro y del aluminio.

3. Si se asume que los sectores venezolanos más afectados por el ALCA serían los agrícolas y de la pesca junto con las industrias que exportan hacia los otros miembros de la CAN o de la ALADI, la opción para ellos dentro del ALCA podría ser una desgravación más lenta que la de los países grandes, la acumulación de origen y la concertación de alianzas estratégicas o de co-inversión con empresas de países más desarrollados para obtener acceso a esos mercados y a su tecnología productiva, gerencial y comercial (ALADI, 2002, p. 69). Sin el ALCA estos sectores entrarían a competir igualmente en el resto del ámbito andino con los mismos productos y empresas cuya competencia los afectaría de integrarse al acuerdo y no contarían con ninguna medida especial para mitigar los efectos negativos.

En conclusión, no entrar en el ALCA significaría para Venezuela no sólo oportunidades perdidas sino también realidades perdidas, dado que su comercio actual con la CAN y con la ALADI resultará vulnerado si los otros países miembros de esos acuerdos entran al ALCA o firman acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos y Venezuela no lo hace. Este impacto económico y social del «no ALCA» para Venezuela debe ser incorporado en cualquier análisis que aspire a contabilizar el costo político doméstico pues, paradójicamente, efectos tales como un mayor desempleo y un mayor número de empresas quebradas podría afectar el apoyo de los partidarios del gobierno y confirmar a los opositores en sus razones para enfrentarlo. El costo político doméstico de la no participación de Venezuela en el ALCA sólo sería distinto si otros países o grupos de países —MERCOSUR o CAN, por ejemplo— tampoco participaran en el acuerdo hemisférico y ésta es la alternativa que se explora en la próxima sección.

Plano regional de la inserción/no inserción de Venezuela

En lo relativo al plano regional, la negociación del ALCA encuentra como primer protagonista de importancia al gobierno de Brasil, que habría reactivado «una vieja rivalidad» con México luego del ingreso de este país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993. En esa oportunidad el gobierno brasileño propuso la expulsión de México de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) porque ese gobierno no había cumplido con el artículo 44¹⁵ pero encontró poco apoyo regional. Las dos economías más importantes de América Latina¹⁶, según Rosas, se enfrentan desde entonces por el liderazgo comercial en la región, aunque con estrategias distintas: Brasil busca formar un grupo sudamericano compacto para exigir mejores condiciones de intercambio a Estados Unidos y la Unión Europea, mientras México negocia «con quien lo desee por separado» (Rosas, 2001, p. 209). Pero si las estrategias se diferencian, los intereses son los mismos: la ampliación de sus mercados para bienes, servicios e inversiones hacia países de menor desarrollo que se ubican en lo que ambos gobiernos consideran sus áreas naturales de influencia. El gobierno brasileño siempre ha considerado a México el principal obstáculo para ejercer su liderazgo regional, lo que se ha evidenciado desde 1997 en el enfrentamiento entre los dos gobiernos por obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en representación de los países latinoamericanos (Templeman, 1997, p. 29).

¹⁵ Según Rosas (2001, p. 201), la creación del MERCOSUR también violó este artículo en sus comienzos; ver también Hummer y Prager, 1998 y, sobre la rivalidad México-Brasil, *Latin America Newsletters Special Report*, 2001, pp. 2-3.

¹⁶ De 200 grandes empresas exportadoras latinoamericanas en 1998, 82 eran mexicanas y 56 brasileñas (Rosas, 2001, pp. 219 y 204-206).

Dado que los empresarios mexicanos han ganado posiciones dentro de un eventual ALCA gracias al TLCAN¹⁷, la estrategia brasileña se orienta a convencer a los demás gobiernos sudamericanos de que sus intereses nacionales son idénticos a los de Brasil y a convertir la negociación del ALCA en una plataforma para alcanzar objetivos de su política globalista, tales como la eliminación de los subsidios agrícolas de los países desarrollados. Resulta interesante observar que el gobierno brasileño abandonó su posición defensiva frente al ALCA a partir de la IIIª Cumbre de las Américas (Québec 2001) y pasó a utilizar desde entonces una estrategia de «participación conflictiva», para lo cual activó en forma paralela la movilización y articulación de las ONG que hasta entonces se habían mantenido prácticamente al margen del debate (Botto, 2003, p. 253). De esta forma, el gobierno puede esgrimir el argumento de la oposición interna al ALCA para obtener concesiones en la negociación.

A diferencia de México, Argentina y Chile, Brasil postergó su apertura comercial hasta 1993, en vísperas de la entrada en vigencia de la unión aduanera del MERCOSUR, por motivos relacionados con su política doméstica¹⁸. En 1990 Fernando Collor de Melo con su Nueva Política Industrial, destinada a hacer más competitivas las empresas brasileñas, sólo logró implantar una reducción arancelaria de 14% pero muchos sectores se mantuvieron protegidos hasta la adopción del Plan Real de Fernando Henrique Cardoso en 1994. Las restricciones que se mantuvieron aun entonces fueron más importantes que las aplicadas en otros países de la región y, por tal motivo, Brasil sigue utilizando una estrategia de liberalización comercial acompañada de un «proteccionismo selectivo» (Naím y King, 1997, p. 285) y está considerada todavía como una de las naciones menos globalizadas de América Latina (*El Universal*, Caracas, 26/02/2004).

Después de la Reunión Ministerial del ALCA en Belo Horizonte (Brasil, 1997), el gobierno brasileño buscó profundizar sus relaciones económicas con los países sudamericanos impulsando la negociación ya existente entre la CAN y el MERCOSUR. García Junior (1999, p. 19; ver también Hirst, 1996) opina que el acuerdo marco firmado entre los dos bloques en marzo de 1998 posiblemente no se hubiera dado de no haberse aprobado un año antes el cronograma y formato de las negociaciones del ALCA pues la modalidad de negociación allí aprobada significó una derrota para la alternativa propuesta por el MERCOSUR, consistente en una negociación entre grupos con etapas sucesivas (facilitación de negocios, armonización de normas y procedimientos aduaneros, etc.) que culminaría con la negociación de acceso a mercados¹⁹. La vinculación entre la negociación CAN-MERCOSUR y el ALCA se aprecia en declaraciones del presidente Cardoso, para quien el primer acuerdo representaría un paso de gran significado comercial y político pues contribuiría a lograr mayor cohesión entre las posiciones de los países de la región en las negociaciones hemisféricas (Romero, 2002, p. 61). Aunque no se especifica, esa cohesión política entre los países sudamericanos dentro de las negociaciones del ALCA se produciría si los demás gobiernos contribuyen a reforzar la posición del MERCOSUR, o más estrictamente la brasileña, habida cuenta de algunas declaraciones de representantes de los gobiernos de Argentina y Uruguay a favor de una negociación con Estados Unidos y/o el ALCA en forma separada.

Esto se entiende mejor cuando se observa que históricamente Brasil no se distinguió por su interés en promover la integración regional, aunque se benefició de ella al expandir sus exportaciones hacia América Latina en 53% entre 1960 y 1964. Rego (1991, p. 282) señala que esa falta de interés se

¹⁷ Un estudio del Ministerio de Desarrollo brasileño ubica entre las amenazas del ALCA el desvío de inversiones extranjeras directas que irían en especial hacia México, *CSM* n° 139, p. 5.

¹⁸ Naím y King (1997, pp. 20-23, 58) consideran que el carácter federal del gobierno brasileño afecta su capacidad para implementar reformas estructurales y las reformas estructurales y la debilidad del Estado le impiden compensar a los grupos «perdedores».

¹⁹ Sobre las posiciones en Belo Horizonte véase Bouzas y Svarzman, 2002, p. 105.

exacerbó con el cambio de régimen político en 1964 ya que su política económica era incompatible con la integración. En 1968 el gobierno militar brasileño adoptó una política de promoción de exportaciones basada en incentivos estatales tales como subsidios, que chocaba abiertamente con los principios de la ALALC-Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Rego, op. cit., p. 274). En los años ochenta, luego del fin de los gobiernos militares, Brasil mantuvo esa política de promoción de exportaciones mediante exenciones impositivas, incentivos crediticios y el manejo de su política cambiaria, aspectos que han continuado después del establecimiento del MERCOSUR (Ibíd., p. 280).

La continuidad de la política industrial brasileña se relaciona así mismo con la permanencia en el tiempo de su política exterior basada en un «paradigma globalista» que no ha cambiado desde los años sesenta. Este paradigma articula las influencias intelectuales de «la crítica nacionalista a la matriz americana de política exterior; generada en el ámbito del Instituto Superior de Estudios Brasileños–ISEB; la visión de la CEPAL de las relaciones centro-periferia y la tradición del pensamiento realista en las relaciones internacionales, en particular la concepción del sistema internacional como un ámbito anárquico» (Veiga, 2002, p. 72). Su objetivo es utilizar la diplomacia económica para complementar las políticas de desarrollo industrial en el ámbito doméstico y, dentro de esta posición, el enfrentamiento con Estados Unidos constituye un «eje de repulsión» (Soares de Lima, citado en Veiga, 2002, p. 73). Para Veiga el proyecto sub-regional (MERCOSUR) y el sudamericano (CAN-MERCOSUR) se relacionan con motivaciones políticas de Brasil, pues si lo económico impulsara su política de integración el gobierno estaría más interesado en el ALCA, dado el mayor tamaño total del mercado al cual tendría acceso, en comparación con los mercados reducidos de los países andinos y el hecho de que las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son relativamente más intensivas en productos manufacturados de mayor valor agregado en comparación con sus ventas a Europa y Asia (Rosenwurcel, 2001, p. 24).

Esta posición es compartida por Martínez y dos Santos (2001, p. 96) para quienes la integración sudamericana no da respuesta a las crecientes necesidades de inversiones y tecnología en los países del MERCOSUR, incluido Brasil. Sin embargo, este proceso asegura la expansión de las empresas brasileñas, que enfrentan crecientes presiones externas y la caída del mercado doméstico por las recurrentes crisis económicas, así como los riesgos de la liberalización de las principales corrientes comerciales entre otros países latinoamericanos.

El MERCOSUR habría sido la primera reacción del gobierno brasileño a los desafíos de la globalización, por lo cual el acuerdo se evaluó por su capacidad de contribuir en forma directa al logro de los objetivos de la política de desarrollo industrial, esto es, alcanzar una actuación más autónoma en el sistema internacional y aumentar el poder de negociación de Brasil frente a Estados Unidos. Esta afirmación del proyecto de desarrollo industrial brasileño frente a cualquier otra consideración ha llevado a que, dentro del MERCOSUR, Brasil actúe en función de una competencia económica con sus socios más que en función de una mayor cooperación con ellos (Veiga, 2002, pp. 73-74). Por eso el MERCOSUR se complementó con la reactivación del Tratado Amazónico en 1992, dado que este tratado incluye cláusulas que promueven la articulación física —mediante proyectos de infraestructura vial, por ejemplo— entre los países de esa región (Cavagnari Filho, 1994, pp. 69-70, 76). El interés brasileño por sacar sus exportaciones hacia el Pacífico explicaría por qué, entre las cumbres presidenciales de Brasilia (2000) y Guayaquil (2001), sólo se avanzó en el área de integración de la infra-estructura sudamericana a lo largo de distintos ejes (MERCOSUR-Chile, Multimodal do Amazonas²⁰ y demás) propuestos por Brasil, mientras las

²⁰ Este eje, por ejemplo, busca vincular puertos de Ecuador y Perú con la zona franca brasileña en Manaus.

otras áreas discutidas y aprobadas en la primera reunión permanecieron estancadas (Gazeta Mercantil, 6/02/2002 citada en CSM N° 99, 11 a 16/02/2002, p. 9).

En cuanto al valor económico para las empresas brasileñas de la apertura de los mercados sudamericanos se puede señalar que después de la firma del ACE 39 entre Brasil y la CAN (1999) se expandieron las exportaciones de repuestos para automóviles y bienes eléctricos y electrónicos hacia esos mercados. Según la ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas), después de ese acuerdo las exportaciones del sector aumentaron 193% hacia Venezuela, 133% hacia Ecuador y 67% hacia Colombia en el primer semestre del año 2000. En los últimos años las exportaciones brasileñas de servicios superaron las de bienes, mediante la participación de constructoras como Odebrecht, Andrade Gutierrez y Mendes Júnior en proyectos de infraestructura en otros países sudamericanos (Valor Económico, 1/10/2001 citado en CSM N° 87, 1 a 7/10/2001, p. 11)

También concuerda Simoes (2002, p. 27) en destacar que la política exterior brasileña mantiene intacta su finalidad histórica: utilizar las relaciones con otros países para mantener su autonomía en materia de desarrollo económico. La diferencia es que mientras históricamente Brasil buscaba ese desarrollo mediante la 'autonomía por la distancia', ahora lo hace a través de la 'autonomía por la participación'²¹ pasando del aislamiento a la integración regional. En esta construcción de su propia autonomía predomina una visión de círculos concéntricos que otorga prioridad al MERCOSUR sobre cualquier otro acuerdo. En esta concepción, «la negociación comercial hemisférica podría ser absorbida por la línea general de la política exterior, sin afectar demasiado su centro de gravedad, en el caso de que su entrada en vigencia fuese postergada para permitir la realización de otras negociaciones que la equilibrasen» (Simoes, 2002, p. 28). Esto explica también porqué Brasil está dispuesto a aceptar ahora, aunque muchas veces se ha opuesto, una mayor institucionalización del MERCOSUR al no tener ya la opción de retroceder a una estrategia nacional autónoma de desarrollo por lo que su dilema es «si va a ceder soberanía dentro del MERCOSUR o dentro del ALCA» (Veiga, 2001, p. 94).

Si el paradigma globalista dominante desde los años sesenta encuadra la participación de Brasil en el MERCOSUR (Veiga, 2002, p. 78), su posición frente a la integración resulta de una visión política originada en los círculos burocráticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se ha mantenido sin cambios a lo largo de las últimas décadas debido a que la transición entre el gobierno militar y el democrático se llevó a cabo de forma pactada. Esto facilitó «la permanencia de estructuras de protección y de incentivos fuertemente discriminatorios en términos intersectoriales que beneficiaron de forma general a los mismos sectores *import competing* favorecidos por la política industrial y de apoyo a las exportaciones de las décadas anteriores (sector automovilístico, químico, electro-electrónico y de bienes de capital)» (Veiga, 2002, p. 78). Ello refuerza la noción de que la integración es evaluada por el gobierno brasileño de acuerdo con su capacidad de contribuir a su propio proyecto nacional, mostrando poco interés por iniciativas que exijan pérdida de soberanía económica y política, avances hacia una unión aduanera plena y/o la coordinación de políticas económicas dentro del MERCOSUR (Veiga, 2002, p. 79). Una integración sudamericana según el modelo europeo, con base en beneficios de orden económico como mercados más amplios, ventajas comparativas y otros similares, pero apoyada por razones ideológicas y culturales, sólo resultaría aceptable para Brasil si su gobierno obtuviera una posición de neto predominio dentro de la misma, de forma que sus intereses no resultaran afectados por los de los demás participantes. Por lo tanto, Brasil buscaría establecer a corto plazo un proyecto económico, no político, en

²¹ Según Simoes esta expresión fue acuñada por el Canciller Luiz Felipe Lampreia en su libro *Diplomacia brasileira. Palavras, contextos e razoes*, Lacerda Editores, Rio de Janeiro, 1999.

Sudamérica —un ALCSA o área de libre comercio, con circulación de inversiones²², acompañada de un programa de desarrollo de infraestructura en «tres frentes»: telecomunicaciones, energía y transporte— como primer paso de un proyecto político de más largo alcance²³.

Estos esfuerzos del gobierno brasileño enfrentan, sin embargo, dos limitaciones importantes: por un lado, los países miembros del MERCOSUR siguen guiándose por sus propios intereses individuales en los planos sub-regional, regional y global²⁴, y por otro, desde su origen, salvo en su retórica el MERCOSUR ha constituido una estrategia de liberalización económica para alcanzar una mayor participación en el proceso de globalización (Phillips, 2003, p. 329). El primer aspecto puede observarse cuando en diciembre de 2001 Brasil buscó flexibilizar el MERCOSUR para avanzar en negociaciones comerciales bilaterales con México²⁵ y Sudáfrica, mientras Argentina se debatía en su crisis financiera (CSM, n° 95, pp. 8-9). Los efectos que esta situación tiene para los países menores se advierten en el caso de Uruguay, que vio frustrada su intención de negociar un acuerdo bilateral de comercio con Canadá por tener que hacerlo en conjunto con el MERCOSUR. Finalmente el acuerdo no pudo concretarse en conjunto debido a diferencias entre Brasil y Canadá (CSM n° 94, pp. 10-11 y n° 100, p. 8). Aunque el debate en torno del ALCA tiende a oscurecer estos aspectos, la realidad es que esos gobiernos tienen interés en un acuerdo de libre comercio hemisférico que suprima las barreras para sus productos en Estados Unidos (Phillips, 2003, p. 335).

Existen estrategias de negociación conjuntas (preferencias) más que intereses de fondo comunes entre países con perfiles exportadores variados: productos primarios (mineros, agrícolas y, dentro de estos últimos, alimentos básicos o no), productos manufacturados y, dentro de éstos, maquila o productos con mayor valor agregado, o servicios. Este aspecto complica la medición del impacto del ALCA por grupos sub-regionales (Phillips, 2003, p. 338) y asegura que en «la recta final» de su negociación predominarán las necesidades y los intereses económicos nacionales antes que los del grupo. En este contexto se entiende que el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Martín Redrado, sugiriera en mayo de 2002 abandonar la retórica contra los subsidios de exportación porque, aunque «se tratara de una cuestión de principios» obstaculizaba no sólo la negociación del ALCA sino también la negociación de un tratado de comercio con la Unión Europea (CSM n° 112, pp. 6-7).

El predominio de los intereses económicos nacionales implica que las negociaciones dentro del ALCA en su última etapa girarán en torno de los intereses de Estados Unidos y Brasil. Por eso el gobierno brasileño ha expresado que «sin Brasil, no habrá ALCA» (Tachinardi, en *Gazeta Mercantil* 24/01/2002) pero, a la vez, ha dejado claro que negociaciones bilaterales alternativas con mercados como Canadá, por ejemplo, «no tienen la amplitud ni menos el potencial de los de la UE o de Estados Unidos» (Celso Lafer en *Jornal do Brasil* 10/05/2002, citado en CSM n° 111, p. 9)²⁶.

²² La única excepción a esta posibilidad sería que Brasil obtuviera un rol central dentro de la misma mediante una proporción de votos mayoritaria que le permitiera controlar esa unión.

²³ «O restante —compatibilidade fiscal, cambiaria, etc.— é obra de longo prazo, que só se consolidará depois que a integração física estiver avançada», Luis Nassif citado en CSM n° 91, novembro 2001, p. 8.

²⁴ Por ello MERCOSUR históricamente ha resultado afectado en su desarrollo por las situaciones macroeconómicas de sus países miembros.

²⁵ Este acuerdo interesa a las empresas de automóviles instaladas en Brasil (Ford, Volkswagen), las cuales buscaban competir con las europeas en el mercado mexicano, cuyos productos ingresan sin aranceles desde la firma del acuerdo de comercio México-UE (cf. CSM n° 104n pp. 7-8) y obtuvo el ingreso a México de sólo 800 productos de los 2.600 propuestos por Brasil (CSM n° 112, mayo 2002, pp. 4-5).

²⁶ «A grande vantagem da ALCA para um país como o Brasil é o acesso ao gigantesco mercado norte-americano [...] outros países latinoamericanos [...] são economias cujo comércio está relativamente restrito», Diputado Marcos Cintra (PFL-SP) en *Panorama Brasil* 16/05/2002.

Esta posición negociadora dentro del ALCA, sustentada por el gobierno de Cardoso, habría sufrido cambios con la llegada de Luiz Inácio [Lula] da Silva a la presidencia a fines del año 2002, pues durante su campaña había expresado su oposición al ALCA en términos bastante similares a los del gobierno venezolano y su preferencia por una unión latinoamericana con una moneda única (CSM n° 126, pp.5-6). Pero aún en esa etapa su partido (Partido de los Trabajadores, PT) no apoyó ni participó en el plebiscito sobre el ALCA realizado en Brasil en septiembre de 2002 (*FolhaOnline* 31/08/2002; *Folha de São Paulo* 11/08/2002). Luego de su elección el nuevo Presidente asumió una «relación pragmática» con el gobierno de Estados Unidos (*Estado de São Paulo* 14/11/2002) e incluso defendió la negociación de un acuerdo bilateral de libre comercio entre el MERCOSUR y ese país, la cual no «significaría la salida de Brasil de las discusiones del ALCA pero permitiría discutir en detalle asuntos que atañen sólo a Estados Unidos y MERCOSUR» (*Valor Economico*, 21/11/2002).

Su propuesta oficial, sin embargo, se diferencia de la manejada previamente por el gobierno de Cardoso pues defiende una negociación de «tres carriles» que dejaría el acceso al mercado en bienes y algunos aspectos de servicios e inversiones para una negociación «4+ 1» con Estados Unidos y para la OMC los temas sensibles (subsidios, anti-dumping, propiedad intelectual) y limitaría el ALCA a solución de controversias, fondos de compensación y tratamiento especial y diferenciado, reglas fitosanitarias y facilitación del comercio (cf. Celso Amorim en Informe ALCA n° 12, setiembre 2003, pp. 8-10). Esta posición presentada por MERCOSUR en la reunión de Trinidad-Tobago (septiembre 2003) logró el apoyo de Venezuela y la CARICOM pero poco después Uruguay, miembro del MERCOSUR, publicó un documento similar al de los países que defendieron el mantenimiento del ALCA con los rasgos aceptados previamente: acuerdo único, abarcador y con fecha de inicio en el año 2005 (*Informe ALCA* n° 12, setiembre 2003, pp. 2-3). Actualmente esta posición es sustentada sólo por MERCOSUR, Bolivia y Venezuela, 6 de los 34 países que negocian el ALCA.

En cuanto a la actitud brasileña frente a la propuesta venezolana, los gobiernos de Brasil y Argentina no tienen interés en el ALBA «ya que Kirchner y Lula consideran que el marco del proceso de integración pasa por MERCOSUR, desde México a Tierra del Fuego» (cf. Corbière en CSM n° 153, janeiro 2004, p. 10). Esto resulta evidente en la declaración conjunta firmada por los presidentes de Brasil y Venezuela en Caracas en agosto de 2003, cuyo Punto 3 expresa, textualmente: «El Presidente de Venezuela explicó al Presidente de Brasil su propuesta sobre la Alternativa Bolivariana para América Latina-ALBA, la cual centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a fin de profundizar la integración latinoamericana con base en una agenda económica y social definida por los Estados soberanos» (CSM, 2004). Este es el único de los 27 puntos de la declaración que no utiliza un verbo en plural («reconocieron», «acogieron», «reiteraron», etc.), indicando en «lenguaje diplomático» la falta de acogida de la propuesta por parte del nivel más alto del gobierno de Brasil. Mientras la posición venezolana refuerza la posición negociadora de Brasil, puede afirmarse también que este país no respalda la propuesta alternativa del gobierno venezolano.

Cuando Venezuela solicitó formalmente su ingreso al MERCOSUR, Cervo (2001) consideraba que la base de la relación entre ese país y Brasil era la concordancia de sus gobiernos acerca de una estrategia de relaciones externas con cuatro puntos fundamentales:

- robustecer las empresas nacionales y regionales a fin de hacerlas competitivas;
- consolidar los bloques económicos de América del Sur e integrarlos entre sí;
- subordinar la negociación del ALCA a las dos prioridades anteriores, y
- preservar la independencia de decisión para alcanzar los fines de esta política; pero también agregaba que Venezuela en MERCOSUR representaba «un equilibrio de fuerzas» teniendo en cuenta que la polí-

tica externa argentina no era confiable por su «falta de racionalidad y continuidad». Además, Venezuela y Brasil podrían desarrollar grandes empresas regionales en los sectores de energía, petroquímica, siderurgia y otros, dando inicio así a un proceso de integración productiva de Sudamérica, con predominio de las empresas brasileñas. Si esto explica el interés brasileño por la inclusión de Venezuela en el MERCOSUR, debe agregarse que la propuesta de una unión militar regional, incluida en el concepto de integración preferido por el gobierno venezolano, ha encontrado el rechazo explícito de los gobiernos de Argentina y Chile, cuando voceros de ambos países señalaron en noviembre de 2003 que no alentaban la formación de agrupaciones como una OTAN sudamericana y que no tenían ningún plan de participar en algo semejante (Gallo, en *La Nación* 12/11/2003).

La CAN es otro actor regional de importancia para la posición geopolítica de Venezuela. El grupo de países que la integran adquiere mayor relevancia por cuanto Venezuela, junto con Colombia, constituyeron por mucho tiempo el núcleo de la actividad tanto económica como política de la CAN. Aunque el gobierno venezolano entró a formar parte del Grupo Andino —hoy Comunidad Andina de Naciones, CAN— en 1973, cuando Chile se retiró cuatro años después de la firma del Acuerdo de Cartagena, le ofreció a Venezuela la oportunidad de jugar un papel destacado en la organización llegando a ejercer una posición importante en el proceso de toma de decisiones. Al respecto se ha señalado que «cerca de un 75% del comercio intra-andino es realizado por Colombia y Venezuela como 'eje central' de la Comunidad, por denominarlo de alguna manera, al menos en términos comerciales. Además, las inversiones intra-regionales en la Comunidad Andina, por lo menos hasta 1997, también estaban concentradas en cierta medida entre Colombia y Venezuela (con más de 60% de la inversión intra-andina). A tal punto que verdaderamente la relación Colombia-Venezuela y, en menor medida, Ecuador-Colombia se vuelve una especie de 'eje catalizador' del proceso andino» (Garay, 2000, p. 212).

Cuando en 1994 surgió la propuesta del ALCA, el gobierno de Rafael Caldera acababa de establecer un régimen de control cambiario y de precios, entre otras medidas destinadas a lidiar con los efectos de la crisis que a principios de ese año llevó a distintas entidades bancarias a la quiebra. De esta forma se alteraba de manera sustancial la orientación dada a la economía de Venezuela por el gobierno previo (el «Gran Viraje» de Carlos Andrés Pérez, 1989-1993), que se había basado en la desregulación económica (liberación de precios y fin de subsidios, etc.), la privatización y la apertura comercial (acuerdo bilateral con Colombia en 1992 y tratado de libre comercio del Grupo de Los Tres, con Colombia y México en 1994). Paralelamente, el gobierno de Caldera reorientó su política exterior hacia una mayor cooperación con Brasil, descuidando los lazos comerciales con Colombia y la CAN. Para entonces, después de dos intentos de golpe militar en Venezuela y del autogolpe del presidente Alberto Fujimori ese mismo año, las reuniones cumbres del esquema andino estaban suspendidas y el bloque sufría una situación de estancamiento (Chan-Sánchez, 1996, pp. 332-339). Sin embargo, los gobiernos andinos reaccionaron por igual, con una actitud positiva, frente a la propuesta del ALCA.

Fue la negociación simultánea de un acuerdo tendiente a conformar un área de libre comercio entre la CAN y el MERCOSUR lo que puso en evidencia las primeras divergencias entre Colombia y Venezuela respecto a hacia donde orientar el comercio de la sub-región andina, al manifestarse el gobierno y la comunidad empresarial de la primera más interesados en la negociación del ALCA y el gobierno venezolano más interesado en negociar con MERCOSUR (cf. Rondón y Urbina, 2003; Giacalone, 2003b). Esta divergencia básica entre los dos principales actores económicos y políticos de la CAN se exacerbó a partir de 1999 con la llegada al gobierno de Venezuela de Hugo Chávez Frías, que acentuó rápidamente la orientación hacia Brasil debido a su rechazo del ALCA. En 1999, según los analistas (*El Tiempo*, Bogotá, 2 de noviembre de 1999), Colombia se ubicaba entre los gobiernos latinoamericanos que buscaban «hun-

dirle a fondo el acelerador al ALCA» y un año después su gobierno solicitó formalmente el ingreso de ese país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el respaldo de las principales asociaciones empresariales (Ramírez, 2000). Por su parte, en mayo de 2001 el gobierno de Venezuela presentó a MERCOSUR una propuesta formal de ingreso a ese grupo, con poco o ningún respaldo empresarial (Ojeda, 2001; INTAL, *Carta Mensual*, mayo 2001: 4; *El Universal*, Caracas, 6 de abril de 2001).

Estas divergencias se tradujeron en la oferta venezolana de desgravación arancelaria para el ALCA hecha en abril de 2003, en la cual se puede observar con claridad su alejamiento de las propuestas presentadas por los otros países andinos²⁷. También resulta notorio que, aun cuando en las posiciones de los otros cuatro países andinos frente al ALCA existe mayor coincidencia, divergiendo de la de Venezuela, estos países minaron de manera sustancial su posición negociadora de conjunto dentro del ALCA, cuando en abril de 2003 «no lograron consolidar una oferta única, convirtiéndose en el único bloque de los que actúan como tal en la negociación que presentó ofertas no comunitarias» (Elorza, 2003). De esta manera, en ellos se observa exacerbada la búsqueda de sus propios intereses por encima de las preferencias del conjunto y resulta difícil hablar de una posición de conjunto de la CAN que otorgue contenido real a la expresión «vocería única» utilizada por la Secretaría General del acuerdo para referirse a su negociación dentro del ALCA.

Desde finales de 2003, aunque Venezuela sigue participando en las negociaciones como miembro de la CAN, destaca más la distancia entre su posición y la del resto de los países andinos, dada la aprobación por parte de estos últimos de una propuesta estadounidense de negociar tratados bilaterales de libre comercio con cada uno de ellos, en la cual no participa el gobierno venezolano. También declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, muestran que para ese país andino lo más importante no es el comercio con el MERCOSUR ni con el resto de Sudamérica, ya que la mayor parte de sus exportaciones se dirigen hacia fuera de la región, de ahí el interés de su gobierno por negociar con Estados Unidos y con la UE (Rodríguez Cuadros, 2004). En la Secretaría General de la CAN la percepción del ALCA —aunque nunca fue negativa— aparece como más positiva desde que asumió el cargo Allan Wagner Tizón (2004b) quien ha declarado que, mientras proyectos sudamericanos como el de desarrollo de infraestructura, auspiciado por Brasil, corresponden al mediano y largo plazo, «nuestras agendas comerciales en el corto plazo están fijadas en Estados Unidos y en la Unión Europea como también en algunos países de la Cuenca del Pacífico» (Wagner Tizón, 2004a). En consecuencia, una de sus primeras actividades oficiales ha sido sostener conversaciones con el BID y el Banco Mundial para trabajar en áreas relativas a competitividad de la población rural y del sector urbano de pequeña y mediana empresa con el fin de prepararlos «para el escenario de libre comercio que plantean estos tratados».

Fuera del círculo sudamericano de proyección geopolítica²⁸ para la decisión venezolana encontramos a Centroamérica y la CARICOM (Comunidad del Caribe), vecinos geográficos de Venezuela pero actualmente con escasa presencia tanto en la política como en la economía venezolana. Esta situación no fue siempre así porque desde la década de los años ochenta y hasta mediados de los noventa, Venezuela mantuvo una activa política exterior hacia la región circuncaribe, considerando esa región como un «área

²⁷ Véase el capítulo de Alejandro Gutiérrez en este mismo libro.

²⁸ También fuera de ese círculo se encuentran México y Chile que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos por lo cual es poco factible pensar que sobre ellos pueda tener algún efecto la no/inserción venezolana. En el caso de Estados Unidos, como las exportaciones petroleras entran libremente a su mercado, todo hace prever que no habrá concesión especial ni presión para estimular a que Venezuela participe en el ALCA. Canadá, por su parte, no posee ni suficientes inversiones ni exportaciones hacia Venezuela como para sentirse afectado.

vital» para los intereses del país por lo que en ese lapso se desplegaron actividades políticas, económicas y culturales para tratar de influir en ella. Se trató de una estrategia activa encaminada a «alterar el ambiente externo a través de la aplicación de medios diversos en función de los intereses y propósitos del Estado» (Romero, 1986, citado en Romero 1989, p. 23). Analistas de la situación caribeña predecían entonces que esta tendencia continuaría incluso después del año 2000, a pesar de la reducción que la crisis de la deuda externa impondría al Caribe insular en los recursos disponibles para la cooperación y asistencia bilateral (Bryan, 1988, p. 14). Enmarcados en la denominación de «potencias medias» o «potencias regionales» se encontraba no sólo Venezuela sino también México y Colombia, que participaron en forma conjunta y activa de iniciativas como la del Grupo Contadora (en 1984, para poner fin a la crisis centroamericana) y del Pacto Petrolero de San José entre México y Venezuela en 1980 (Grabendorff, 1984; Barthelemy-Febrer 1980).

A principios de los años noventa la tendencia se mantuvo pero a las consideraciones de orden estratégico y político de la década anterior se añadieron elementos orientados a establecer una mayor articulación institucional y económica. Como parte de esta política se percibió la integración como un mecanismo para ampliar las exportaciones no tradicionales de Venezuela, constituyendo el Caribe un mercado natural para las mismas (Briceño Ruiz, 1997). Esta perspectiva fue sustituida durante la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1998) por su marcado desinterés hacia el Caribe y la búsqueda de una integración más profunda con Brasil²⁹, tendencia que continúa el gobierno actual desde 1998.

Aunque los países miembros de la CARICOM han respaldado posiciones del gobierno venezolano relativas a la incorporación de medidas de tratamiento especial y preferencial y fondos de cooperación en el ALCA, la aceptación de su inclusión en el borrador del tratado desde el año 2002 y el hecho de que serán receptores seguros de ese tipo de medidas, no permite imaginar ningún otro elemento que pueda alterar su incorporación al mismo. Por lo tanto, la no participación del gobierno venezolano en el ALCA tampoco afectaría la decisión de sus respectivos gobiernos y mucho menos la de los centroamericanos, que ya han negociado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

En resumen, una decisión venezolana de no participar en el ALCA no tendría «efecto de arrastre» en Sudamérica para los otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones ni para los que, como Brasil y Argentina, han presentado las posiciones más conflictivas en las negociaciones. Fuera de la región tampoco tendría mayor consecuencia en el Caribe o Centroamérica. Esta situación pondría en evidencia una desmejora relativa de la posición geopolítica regional de Venezuela ya que, en etapas anteriores, se hubiera podido esperar que una decisión de esta naturaleza surtiera algún efecto por lo menos en los otros miembros de la CAN y en las pequeñas naciones caribeñas y centroamericanas.

Conclusiones

En la actualidad, cuando en las negociaciones del ALCA parece prevalecer la denominada «arquitectura de dos pisos»: el primero con un conjunto común de derechos y obligaciones y, el segundo, con obligaciones y beneficios adicionales sólo para aquellos países que deseen participar en él (Bouzas, 2003, p. 4), se asume que Venezuela, junto al MERCOSUR y Bolivia, estará entre los que sólo aceptarán la forma «light» o primer piso del ALCA (*Informe ALCA*, febrero 2004, p. 6). Se abre así la posibilidad de

²⁹ Esto sería contradictorio con lo señalado por Herman (1980, p. 56), para quien el mismo Caldera en su primer período de gobierno (1968-1973) hizo ingresar a Venezuela en el Grupo Andino para contrarrestar el creciente poder de Brasil.

que a la inserción/no inserción se agregue una tercera opción que incluiría obligaciones y derechos en las nueve áreas de negociación, las cuales podrían implicar niveles de compromiso similares a los de la Organización Mundial de Comercio, fuera del área arancelaria en la que ya se han hecho ofertas concretas por sectores, países y grupos de países (Bouzas, 2003, p. 4).

Sin embargo hay quienes creen que, considerando el discurso presidencial cada vez más conflictivo y anti-ALCA, la desautorización y sustitución de los negociadores técnicos, la influencia de académicos de izquierda en la Comisión Asesora y el hecho de que ésta haya desplazado de la negociación a los Ministerios de Producción y Comercio y de Relaciones Exteriores, puede anticiparse que el gobierno venezolano está decidido a no firmar el ALCA. Esta posición gubernamental parece ignorar el costo político, económico y social que el gobierno deberá pagar en los años próximos «si hay ALCA y Venezuela se queda afuera, ya que para todos los actores involucrados (CAN, MERCOSUR y Brasil, por ejemplo) un ALCA sin Venezuela resulta totalmente factible»³⁰.

En cuanto a la debilidad de otras alternativas negociadoras preferibles al ALCA, se advierte, por un lado, poco interés de la Unión Europea por firmar a corto plazo un acuerdo de asociación con la CAN, incluyendo un tratado de libre comercio, debido a reticencia respecto del grado de integración realmente alcanzado por los países andinos como para calificar con miras a asociarse a la UE (Wagner Tizón, 2004b); y, por otro lado, en el caso del acuerdo CAN-MERCOSUR que entrará en vigencia posiblemente en el año 2005, que éste brinda a las empresas venezolanas escasas opciones de expansión en Sudamérica. Al respecto, Naím y King (1997, p. 23) consideran además que los acuerdos del tipo CAN-MERCOSUR resultan contraproducentes para los países en desarrollo puesto que los siguen marginando de las corrientes del comercio mundial y los condenan a seguir en «la promiscuidad comercial, firmando acuerdos con cualquiera que se los propone, probablemente sus vecinos» y, a mediano plazo, un acuerdo entre estos países implica pocos avances tecnológicos, poca articulación productiva y valor agregado así como baja evolución de la competitividad de naciones y empresas (Moneta, 2002, p. 105). Finalmente, la negociación ya iniciada de acuerdos bilaterales de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, Perú y Ecuador; países miembros de la CAN, resulta perjudicial para Venezuela ya que se están fijando criterios que comprometen la posición de la CAN dentro del ALCA sin que el gobierno venezolano participe del proceso.

Un análisis de los escenarios abiertos a Venezuela permite destacar tres posibilidades:

- a) que no se firme el tratado del ALCA en 2005, con lo cual el gobierno venezolano quedaría justificadamente interna y externamente en su posición de solicitar su postergación³¹;
- b) que el tratado se establezca en la fecha prevista pero que otros países, además de Venezuela, no lo firmen con lo cual entonces no quedaría aislada;
- c) que el tratado sea firmado por todos los demás gobiernos que participan en la negociación del ALCA y, en ese caso, Venezuela se enfrente a la disyuntiva de si participar en él o no.

Este último es básicamente el escenario que elegimos considerar porque permite aquilatar mejor los aspectos políticos y geopolíticos de la decisión que debería tomar el gobierno venezolano. Con respecto a esta opción puede concluirse que, mientras la inserción de Venezuela en el ALCA puede tener un costo político interno al restarle apoyo entre ciertos círculos que lo respaldan actualmente, ésta no

³⁰ El autor de este testimonio pidió permanecer anónimo pero es un testigo cercano al proceso gubernamental.

³¹ Sin embargo, si no se firma el ALCA en el año 2005 o si se establece una arquitectura del ALCA a dos niveles, la firma de acuerdos de libre comercio —entre MERCOSUR y Estados Unidos, y entre Colombia, Ecuador y Perú y Estados Unidos, respectivamente— tendría para las exportaciones venezolanas el mismo efecto negativo señalado para un escenario de autoexclusión de Venezuela del ALCA.

implicaría mayores consecuencias al nivel geopolítico puesto que los gobiernos latinoamericanos que objetan el ALCA lo hacen como parte de una estrategia destinada a obtener mejor posicionamiento o mayor flexibilidad dentro de la negociación. Más bien al contrario, la no inserción de Venezuela podría llegar a generar mayor oposición política interna que la ya existente debido al costo económico y social que tendría y el costo geopolítico para el gobierno se daría sobre todo en términos de aislamiento dentro de la CAN, donde hasta hace poco ocupaba una posición de relativa importancia.

Referencias bibliográficas

- ALADI (2002) El tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías en las negociaciones del ALCA. Secretaría General, Estudio 154, 28 de noviembre. Montevideo.
- Álvarez R, Víctor (2003a) «Hacia una nueva integración». Intervención en ALADI, Montevideo, 16 y 17 de junio.
- Álvarez R, Víctor (2003b) «Del ALCA al ALBA», *Dinero* n° 177, Caracas, septiembre 2003: 42-43.
- Álvarez, Raquel; Briceño, José y Bustamante, Marleny (2002-2003) «Venezuela y su participación en el ALCA: opciones y desafíos», *Aldea Mundo* año 8 n° 12, noviembre-abril.
- ASC-Alianza Social Continental (2003) Declaraciones de Judith Valencia, asesora de la delegación venezolana en la Reunión Ministerial de Miami, el 20 de noviembre: www.asc.org
- Badillo Rojas, Arnaldo (2002) «El ALCA y la apertura comercial agrícola», *Diario Tal Cual*, Caracas, 24 octubre de 2002.
- Barthelemy-Febrer, Françoise (1980) «L'offensive vénézuélienne dans les Caraïbes: continuité et changement», *Amérique Latine* n° 4, oct.-dec.: 19-27.
- Botto, Mercedes (2003) «Mitos y realidades de la participación no gubernamental» en Diana Tussie y Mercedes Botto (eds.) *El ALCA y las Cumbres de las Américas: una nueva relación público-privada?* Editorial Biblos, Buenos Aires.
- Bouzas, Roberto (2003) «¿Adónde conduce la 'recta final' del ALCA?», *Escenarios Alternativos*, n° 13, diciembre: www.escenariosalternativos.org
- Bouzas, Roberto y Svarzman, Gustavo (2002) «El Área de Libre Comercio de las Américas: ¿dónde está y hacia dónde va?», *Comentario Internacional* 3 (1^{er} semestre): 75-108.
- Briceño Ruiz, José (1997) «Venezuela y la Cuenca del Caribe en la segunda ola de la Integración latinoamericana», *Revista Mexicana del Caribe*, año II, n° 3: 152-168.
- Bryan, Anthony T. (1988) *The Latin American Geopolitical Environment: Trends and Influences on the Commonwealth Caribbean*. Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales, CLACSO. Puerto Rico, 26 a 28 de enero.
- Calabria, Nelson (2002) Intervención en Conferencia Internacional «Venezuela ante el ALCA: riesgos y oportunidades», Caracas, septiembre de 2002: www.mpc.gov.ve
- Camel A., Eduardo (2001) «Venamcham: Venezuela corre el riesgo de quedar fuera del ALCA», *El Nacional*, Caracas, 8 de agosto de 2001.
- Cardozo, Elsa y Romero, María Teresa (2001) «El proyecto internacional de Hugo Chávez y su propuesta para la democracia y la integración»: www.visionvenezolana.com/Documentos

- Cavagnari Filho, Geraldo Lesbat (1994) «América del Sur: algunos elementos para la definición de la seguridad nacional», en F. Leal Buitrago y J. G. Tokatlán (eds.) *Orden mundial y seguridad. Nuevos desafíos para Colombia y América Latina*. TM Editores/SID/IEPRI, Bogotá.
- Cervo, Amado Luiz (2001) «O eixo Venezuela-Brasil», RelNet- Correio Internacional (site Brasileiro de Referencia em Relações Internacionais): www.relnet.com.br
- Chan-Sánchez, Julio (1996) *The Politics of Economic Integration in Latin America: A Case Study of the Andean Group, 1969-1995*. Disertación Doctoral en Ciencia Política, The City University of New York.
- Chávez, Hugo (2000) Discurso ante la Comunidad Andina de Naciones. Lima, junio.
- Chávez, Hugo (2002) De la integración neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina. Principios rectores del ALBA. Discurso en la ALADI, Montevideo, 16 de agosto.
- «Chávez recomienda desoír llamado al ALCA», *El Universal* 25/11/2003, Caracas.
- CIOSL/ORIT (2001) La dimensión social y democrática en los procesos de integración. Resolución 14 del XV Congreso Continental CIOSL/ORIT, Washington, 23 a 26 de abril.
- Comisión Presidencial para el ALCA (2003) Posición de Venezuela ante el Área de Libre Comercio de las Américas. Ministerio de Producción y Comercio, noviembre. Caracas.
- CSM-Correio Sindical Mercosul (varios números).
- CSM-Correio Sindical Mercosul (2004) Declaración conjunta de los presidentes de Brasil y Venezuela. Caracas, 23 de marzo de 2004: www.comunidadandina.org
- De Hollanda Filho, Sergio Buarque (1997) «O Mercosul e a formação da ALCA», *Informações FIPE*, n° 205 (outubro): 13-14. Fundação Instituto de Pesquisa Economica.
- Di Tella, Torcuato S. (2000) «¿Qué se gana con una Unión Sudamericana?», *Desarrollo Económico* vol. 40, n° 159 (octubre-diciembre): 519-536.
- Economía Hoy* (Caracas, diario de información económica), varios números.
- Elorza, Juan Carlos (2003) «Las negociaciones del ALCA y la CAN en Acceso a Mercados de Bienes Agrícolas y no Agrícolas». CAN, Lima, junio de 2003: www.comunidadandina.org
- Garay, Luis Jorge (2000) «La Comunidad Andina en el marco del ALCA», en J.M. Villasuso y R. Trejos Solórzano (eds.) *Comercio e integración de las Américas*. INTAL-BID/UCR-IICE/IICA. San José de Costa Rica.
- García Junior, Armando Alvares (1999) *ALCA. A Area de Livre Comércio das Américas*. Edições Aduaneiras, São Paulo.
- Giacalone, Rita (1988) *Venezuelan Foreign Policy Towards the Eastern Caribbean: Compatibility or Conflict with U.S. Policy?* Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales. CLACSO, Puerto Rico 26 a 28 de enero.
- Giacalone, Rita (2003) «Posición y participación de los empresarios en las negociaciones entre la CAN y el MERCOSUR», en R. Giacalone (ed.) *CAN-MERCOSUR a la sombra del ALCA*. GRUDIR/ULA, Mérida.
- González Urrutia, Edmundo [Embajador de Venezuela en Argentina] (2000) «Venezuela propone una nueva alianza sudamericana», 1/09: www.mercosur.com
- Grabendorff, Wolf (1984) «El papel de las potencias regionales en la crisis centroamericana», *Revista Occidental* (Edición Especial), año 1, n° 4: 437-460.
- Guadagni, Alieto (2001) «El MERCOSUR como proyecto geopolítico», en: 5° Congreso de Economía: Los desafíos del nuevo escenario económico internacional, 8 a 10 de mayo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Herman, Donald L. (1980) *Christian Democracy in Venezuela*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

- Hernández, José Luis (2002) Posición del sector industrial en los acuerdos de integración. Intervención en Conferencia Internacional «Venezuela ante el ALCA: riesgos y oportunidades», Caracas, septiembre de 2002: www.mpc.gov.ve
- Hernández, K. (2001) «Palma: falta infraestructura para negociar en el ALCA», *El Nacional*, 2 de agosto de 2001.
- Herrera-Vaillant, Antonio (1997) «The MERCOSUR Illusion», *Business Venezuela* n° 197, June: 2.
- Hirst, Mónica (1996) «La política exterior de Brasil en dos tiempos», en *Anuario Argentino de Derecho Internacional*. Número Extraordinario, pp. 237-258.
- Hummer, W. y Prager, D. (1998) *GATT, ALADI y NAFTA. Pertenencia simultánea a diferentes sistemas de integración*. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires.
- Izarra, William E. [Diputado del MVR] (2003) «ALCA», 5/07: www.analítica.com
Latin America Newsletters Special Report, 2001.
- Madrid, Janet (2002) Intervención en Conferencia Internacional Venezuela ante el ALCA: Riesgos y Oportunidades. Caracas, septiembre.
- Martínez Puñal, Antonio y dos Santos Carneiro, Patricia Helena (2001) De los Anos de MERCOSUR. Ponencia en X° Congreso de la FIEALC, Moscú, junio.
- Moneta, Carlos Juan (2002) «Integración política y mercados en la era global: MERCOSUR y el ALCA» en *América Latina. El inicio de un nuevo milenio*. Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.
- Muñoz, Albis (2003) El sector privado venezolano frente al ALCA. Simposio «ALCA: una perspectiva desde Venezuela», San Cristóbal, octubre de 2003.
- Naím, Moisés y King, Robert (1997) «Free Trade Express? The Future of Hemispheric Integration», *Harvard International Review* Vol. XIX, N° 4 (Fall).
- Neri de Ross, Enie (2003) «¿ALCA vs. CAN y MERCOSUR?», *El Universal*, Caracas, 3 de diciembre de 2003.
- Ojeda, William (2001) *Integración: Venezuela y su dilema entre la CAN y el MERCOSUR*. Ediciones Solar, Caracas.
- Pierantoni, Andrés (2002) Intervención en Conferencia Internacional Venezuela ante el ALCA: Riesgos y Oportunidades, Caracas, septiembre: www.mpc.gov.ve
- Phillips, Incola (2003) «Hemispheric integration and subregionalism in the Americas», *International Affairs* vol. 79, n° 2: 327-349.
- Quade, Edward S. (1989) *Análisis de formación de decisiones políticas*. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- Raffalli, Juan M. (2001) «Integración revolucionaria»: www.primerojusticiamiranda.org
- Ramírez, Marta Lucía (2000) «NAFTA: inversión para no desaprovechar», *El Tiempo*, Bogotá, 28 de febrero de 2002.
- Rego, Luiz Carlos Costa (1991) «La experiencia de Brasil en los distintos esquemas de integración económica latinoamericana», en V. Urquidí y G. Vega Cánovas (eds.) *Unas y otras integraciones*. El Colegio de México/El Trimestre Económico, México.
- Revista del MERCOSUR* (varios números).
- Rodríguez Cuadros, Manuel (2004) La visión del Perú de la integración andina y latinoamericana. Exposición en Secretaría General de la CAN, Lima, 4 de abril: www.comunidadandina.org
- Romero, Aníbal (1986) *La miseria del populismo*. Ediciones Centauro, Caracas.
- Romero, Marco (2002) «ALCA debe complementar negociaciones comerciales en la OMC» (Entrevista a Fernando Henrique Cardoso), *Comentario Internacional* 3 (1^{er} semestre): 59-67.

- Romero, María Teresa (1989) «La administración Lusinchi y su política exterior hacia el Caribe anglófono», *El Caribe Contemporáneo* n° 19, julio-diciembre: 23-37.
- Rondón, Virginia y Urbina, Xiomara (2003) «Negociaciones entre la CAN y el MERCOSUR para establecer una zona de libre comercio. Avances y obstáculos», en R. Giacalone (ed.) *CAN-MERCOSUR a la sombra del ALCA*. GRUDIR/ULA, Mérida, 2003.
- Rosas, María Cristina (2001) *La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y América Latina*. UNAM, México.
- Rosenwurcel, Guillermo (2001) Los países del MERCOSUR buscan su lugar en el mundo. Seminario Internacional PROSUR/Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, noviembre.
- Simoes, Antonio Jose Ferreira (2002) A ALCA no limiar do século XXI: Brasil e EUA na negociação comercial hemisférica. Documento de Trabalho 9. INTAL-ITD-STA, Buenos Aires.
- Sucre, Juan Pablo (2003) «Venezuela ante el MERCOSUR», *El Nacional*, Caracas 31 de agosto de 2003.
- Templeman, John (1997) «Power Shift in Latin America: Brazil Starts to Flex Its Muscle» *Business Week*, October 13: 29.
- Veiga, Pedro da Motta (2001) «El MERCOSUR como proyecto geopolítico». en 5° Congreso de Economía: Los desafíos del nuevo escenario económico internacional Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 a 10 de mayo: 91-95.
- Veiga, Pedro da Motta (2002) «Brasil a inicios del nuevo milenio: herencias y desafíos de la transición», en R. Bouzas (coord.) *Realidades nacionales comparadas*. Fundación OSDE/Grupo Editor Altamira, Buenos Aires.
- Wagner Tizón, Allan (2004a) Conferencia de prensa ofrecida al término de su visita oficial a Estados Unidos. Washington D. C., 3 de marzo de 2004: www.comunidadandina.org
- Wagner Tizón, Allan (2004b) Declaraciones a la emisora RPP en Washington, 2 de marzo de 2004 (cf.: Notas de Prensa: www.comunidadandina.org).

Personas entrevistadas:

Sadio Garavini, Coordinador de Relaciones Internacionales del partido COPEI, 2 de diciembre de 2003.

Carlos A. Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, 28 de septiembre de 2003.